

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1579 DE

(25 NOV 2019)

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y TRANSPARENCIA (E)

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el artículo 108 y en el literal b) del numeral 5° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo previsto en el numeral 9° del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010 y con lo consagrado en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante la Resolución número 1112 del 23 de agosto de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del Superintendente Delegado para Protección al Consumidor Financiero y Transparencia, ordenó a los ciudadanos "JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1022924811, como partícipes, promotores y receptores de dineros en la pirámide "TELAR DE LOS SUEÑOS", incluidas las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", que opera en esta ocasión en la ciudad de Bogotá, según se ha expuesto en el presente acto administrativo, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** de las operaciones de captación o recaudo de dineros no autorizado, bajo la modalidad de "pirámide", en los términos explicados en extenso en la parte considerativa del presente acto administrativo. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en armonía con lo consagrado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

SEGUNDO. Que el referido acto administrativo fue notificado personalmente el día 26 de agosto de 2019 a la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.018.416.242 en su

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

calidad de partícipe, promotora y receptora de dineros en este esquema, tal y como figura en la constancia¹ suscrita para el efecto y que obra en los antecedentes de la actuación administrativa.

TERCERO. Que estando dentro del término legal, en escrito presentado personalmente ante esta Superintendencia y radicado bajo el número 2019103103-098-000 del 09 de septiembre de 2019, el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, portador de la tarjeta profesional número 84.275 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial de la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución y solicitó "que reponga la resolución 1112 de 2019".

CUARTO. Que, en el recurso de reposición presentado, el apoderado no aportó ni solicitó la incorporación de medios probatorios como sustento de los argumentos propuestos.

QUINTO: Que a continuación, se transcriben los motivos de inconformidad invocados por la parte recurrente frente a la referida Resolución 1112 de 2019, en el mismo orden en que fueron expuestos por el apoderado, seguidos de las consideraciones de esta Superintendencia frente a cada uno de ellos.

5.1. Argumentos del recurrente relativos a la aplicación del procedimiento administrativo especial en materia de captación no autorizada de recursos del público

En relación con este aspecto, se transcriben a continuación los puntos expresados por el apoderado recurrente en acápite que denominó "Análisis jurídico del recurso":

"(...) Partiendo de la tesis que el pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en un acto administrativo, en el que el único recurso viable es el de reposición para agotar vía gubernativa, ese acto administrativo es decir la resolución de 1112 de 2019, debe contener todos los elementos básicos de estructuración de los actos administrativos para que tengan toda la validez soporte de su ejecutoria.

Deja absolutamente claro el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo que, en las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria, como es el caso que nos ocupa y muy a pesar del régimen especial del Estatuto Financiero y sus normas complementarias que:

ARTÍCULO 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados.

Como se puede apreciar a lo largo de la descripción de los hechos objeto de este recurso, lo que menos aplica la Superintendencia Financiera es precisión y claridad en la medida que son procedentes para efecto de en este caso, materializar la orden de la devolución de los dineros recibidos en este caso por mi cliente CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, veamos:

¹ Radicado 2019103103-077.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1579** DE

Hoja No. 3

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

Ordena la Superfinanciera que se devuelvan los recursos recibidos, según la entidad regulatoria por CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, pero en ninguna parte se dice a quien se le deben devolver, en qué tiempo o en qué circunstancia.

A lo largo de la resolución se menciona a mi cliente así

En la página 37 de la resolución acá impugnada manifiesta la Superintendencia Financiera que "Como resultado del análisis efectuado en el acervo probatorio previamente indicado, se elaboró el siguiente cuadro en el que se muestra el resumen de los movimientos de los recursos entregados en el esquema "TELAR DE LOS SUEÑOS" en el cual participaron y recibieron dineros entre otros, los ciudadanos... CINDY MARITZAPOLANCO (SIC) RODRIGUEZ....según lo informado por las 25 personas que aportaron información a la comisión de visita, sobre este esquema:..."

En ese cuadro aparece mi cliente en la casilla número 9 en el que por las casillas no se determina cómo llegó a TELAR DE LOS SUEÑOS, se determina que sí entregó dinero, más concretamente la suma de cuatro millones quinientos mil pesos (\$4.500.000.00), que recibió cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.200.000.00)(sic) a 8 personas, que no ha devuelto recursos y que no le han devuelto los recursos aportados por ella.

En el mismo cuadro, pero en la página 38 aparece que la declarante número 24 es decir MARITZA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ, quien según la Superfinanciera, le entregó dinero a CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, en un monto de \$4.500.000.00 y que no se le ha devuelto lo aportado.

En la página 50 de la resolución acá impugnada, se deja "como un "hecho objetivo" que en la realidad económica del "TELAR DE LOS SUEÑOS" los ciudadanos entre otros...CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, entregaron la suma de cuatro millones quinientos mil pesos (\$4.500.000.00)... y han vinculado al menos a quince personas (15) en cada una de las mándalas que lideran... que les permitieron recibir en un mes treinta y seis millones de pesos (\$36.000.000.00) el equivalente a recibir 800% del monto pagado al momento de la vinculación"

Hasta acá lo único claro que se tiene es que mi cliente recibió dineros del ejercicio "TELAR DE LOS SUEÑOS", que entregó cuatro millones quinientos mil pesos (\$4.500.000) según el cuadro de la página 37 y que recibió cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.000.000) (sic) y la pregunta es ¿A QUIEN LE RECIBIÓ ESE DINERO? ¿CÓMO LO RECIBIÓ? ¿CUÁNDO? ¿QUÉ SOPORTES TIENE LA SUPERFINANCIERA DE ESE MONTO RECIBIDO POR MI CLIENTE?

Es más, en las casillas de los cuadros antes anunciados en los que se relacionan en la página 37 dice la Superintendencia que le recibió \$45.200.000.00 y que recibió de 8 personas y reitero mi pregunta que tendrá que ser resuelta en la definición de este recurso y a ¿Quién le recibió dinero mi cliente CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ?

Si bien es cierto en la diligencia del 5 de agosto de 2019, la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ manifestó libre de apremio y juramento que, si recibió dinero, manifestó en dicha diligencia a quien le había recibido y no solo mencionó a las personas que le habían recibido dinero, sino que manifestó que tenía toda la intención de devolverlo, pero ante una circunstancia como la descrita por la entidad pública de simplemente decir que mi cliente recibió cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.200.000.00) y que recibió de 8 personas, sin determinar realmente a quien le recibió, es un acto administrativo que carece de la claridad y la precisión que obliga el artículo 47 del CPACA, corriendo el riesgo de una nulidad futura, bien sea solicitada en sede de la administración o ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Si bien es cierto el principio de publicidad ordena que para que la administración se pronuncie, debe hacerlo en una forma absolutamente clara y precisa, el principio del debido proceso ordena que cuando la administración de una orden, como en este caso la devolución de unos dineros, esa orden debe corresponder a una rigurosa investigación y análisis por parte de la Superfinanciera y no de pronunciamientos abiertos, impersonales, imprecisos como es que mi cliente recibió de 8 personas y que tiene que devolver cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.000.000.00) sin determinarse a quien, ni en qué tiempo, ni dónde, ni en qué circunstancias se debe hacer esa devolución"

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

5.1.1. Consideraciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esta Superintendencia encuentra que sus argumentos se apoyan bajo el supuesto de considerar que nos encontramos en presencia del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) para señalar que *"lo que menos aplica la Superintendencia Financiera es precisión y claridad en la medida que son procedentes para efecto de en este caso, materializar la orden de devolución de los dineros recibidos"* precisando que el acto que se recurre *"en ninguna parte se dice a quien se le deben devolver, en qué tiempo o en qué circunstancia"*.

En el mismo sentido señala que en la Resolución 1112 de 2019 no se determina como su representada llegó al "TELAR DE LOS SUEÑOS" y, en lo relativo a los dineros por ella recibidos en dicho esquema manifiesta que el acto administrativo recurrido no es claro en señalar *"¿a quién le recibió ese dinero?, ¿cómo lo recibió?, ¿cuándo?, ¿qué soportes tiene la Superfinanciera de ese monto recibido por mi cliente?"* *"¿a quién le recibió dinero mi cliente?"*.

A pesar de plantear los anteriores interrogantes, acto seguido procede a confirmar que su representada en diligencia del 5 de agosto de 2019, manifestó a esta Superintendencia libre de apremio y juramento que *"si recibió el dinero"* y *"a quien le había entregado el dinero"*, no obstante, continúa su argumentación en el sentido de señalar que al no determinar en el acto recurrido a quién le recibió recursos la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ el mismo carece de *"claridad y la precisión que obliga el artículo 47 del CPACA corriendo el riesgo de una nulidad futura"*.

Todo lo anterior para concluir que, en virtud del debido proceso, una orden impartida por la administración debe ser clara y precisa, fundada en una rigurosa investigación, por lo que califica la orden de devolución de recursos impartida por esta Autoridad como de *"pronunciamientos abiertos, impersonales, imprecisos"* toda vez que no señaló *"a quién, ni en qué tiempo, ni en dónde, ni en qué circunstancias se debe hacer esa devolución"*, sustentando así que se reponga la Resolución 1112 de 2019.

En atención a las consideraciones anteriormente mencionadas, resulta necesario en primera medida, dar claridad sobre la naturaleza del procedimiento aplicable en materia de captación no autorizada de recursos del público, a efectos de demostrar que la actuación administrativa adelantada que finalizó con la Resolución 1112 de 2019 se desarrolló con total apego al debido proceso. Veamos:

5.1.1.1. Normatividad vigente en materia de captación no autorizada de recursos del público y procedimiento aplicable.

En Colombia la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público, por disposición del artículo 335 de la Constitución Política son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa autorización del Estado, quien, a través de esta Superintendencia o de la Superintendencia de Economía Solidaria para las entidades del sector solidario, confiere la autorización correspondiente y las habilita para ejercer cualquiera de dichas actividades. Veamos:

"Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

*interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito"*²

Sobre el significado de tal intervención, la jurisprudencia ha señalado:

*"(...) el artículo 335 constitucional hace explícito el interés público de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y de cualquiera otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos de captación y del ahorro privado, y en consecuencia estatuye que se ejercerán previa autorización del Estado y conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito".*³

Frente a la actividad de interés público, la misma no fue definida por el constituyente, sin embargo, este concepto ha sido desarrollado vía doctrinal y jurisprudencial, definiéndolo como:

*"aquella actividad privada que involucra un interés público, y que está sometida a un régimen de autorización y no de concesión. ARIÑO ORTIZ resume el concepto adoptado originalmente por la doctrina italiana en cuatro puntos, diciendo que las actividades de interés público: 1. Son actividades privadas, en otras palabras, actividades que no están a cargo del Estado y, por ende, tampoco lo está su titularidad.; 2. Son de interés general por las implicaciones que tiene su prestación, 3. Están dirigidas al público en general y no a un sector específico y, por lo tanto, reducido, y 4. Se hallan sometidas a un régimen de autorización y no de concesión como de ordinario sucede con los servicios públicos en la teoría tradicional"*⁴.

A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha citado sobre el particular:

"La actividad aseguradora, como subsector económico, comparte con la actividad financiera, la actividad bursátil, y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, la calidad de ser una actividad económica explícitamente mencionada en la Constitución para los siguientes tres efectos:

1. *Establecer que corresponde al Congreso dictar por medio de leyes las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de regularla (Literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución);*
2. *Determinar que corresponde al Presidente de la República ejercer, de acuerdo con la ley a que se refiere el punto anterior, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que la ejercen (numeral 24, artículo 189 de la Constitución), y*
3. *Definir que se trata de una actividad de interés público, y por ende, sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado, conforme a la ley, reiterando que al legislador corresponde la regulación de la forma en la cual el gobierno intervendrá en ella (artículo 335 de la Constitución).*

Existen varias razones por las cuales el constituyente estableció de manera explícita una arquitectura institucional tan detallada para la regulación de subsectores económicos específicos como el asegurador, el financiero y el bursátil. De hecho, la Constitución misma señala el punto de partida de dichas razones, al indicar que se trata de actividades de "interés público". Ese interés público nace, por supuesto, del hecho de que se trata de actividades en las que se maneja, aprovecha e invierten recursos captados del público, rasgo que también reconoce la propia Constitución. Son actividades, por lo demás, que canalizan de manera importante el ahorro de la nación hacia la inversión, lo cual enfatiza su definición como actividades de interés público. (Negrilla fuera de texto).

Sin embargo, estas razones no bastan para explicar el especial cuidado que la Constitución pone en el diseño del régimen institucional y de competencias regulatorias de estas actividades específicas, pues existen muchos otros sectores económicos que pueden considerarse de interés público, y que de alguna manera manejan y aprovechan cuantiosos recursos del público. Piénsese, por ejemplo, en los manejos

² ARTICULO 335 Constitución Política.

³ CORTE CONSTITUCIONAL, C-136 de 1999.4 de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

⁴ López Roca Luis Fernando. "El principio de igualdad en la actividad financiera". Universidad Externado de Colombia. 2012.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

de tesorería de un gran conglomerado industrial, o en la importancia que para el interés público tienen ciertos sectores agrícolas o de servicios. No obstante, respecto de ellos el constituyente no hizo una mención tan expresa, específica y minuciosa.

Lo que tienen en común las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y otras afines, que las distingue de otras actividades económicas igualmente importantes, pero no sometidas a la fuerte intervención estatal que para aquellas autoriza la Constitución, es que **dependen para su correcto funcionamiento de un voto colectivo, permanente y tácito de confianza, cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para la economía de un país.** La cotidianidad rutinaria de las transacciones bursátiles, aseguradoras y financieras, a veces opaca el hecho de que cada una de ellas está fundada en una presunción intangible y frágil, pero esencial, en el sentido de que será cumplida la obligación a futuro a que se compromete la respectiva entidad financiera, bursátil o aseguradora. Esa presunción no tiene garantía distinta a la solidez misma del sistema. Cuando una persona deposita en una cuenta bancaria una suma de dinero, presume y confía que al día siguiente podrá retirar esa misma suma, más las anteriores que hubiese podido depositar. Esa presunción sólo es posible gracias a una confianza sistémica, no explícita, pero verdadera, en la solidez de la entidad financiera respectiva. Lo mismo puede afirmarse respecto de quien compra un título bursátil, que espera, al vencimiento del mismo, que se le pague la suma representada en el título. Sólo la posesión del título le permite confiar en el cumplimiento de la obligación. Y en el caso de quien suscribe un contrato de seguros, la persona paga una prima en el entendido de que, de ocurrir el siniestro descrito en el contrato, le será pagada una indemnización o beneficio. No existe ninguna garantía de que ello ocurrirá, excepto la derivada de la seriedad de la compañía de seguros, fruto de que ella cumple con los estándares regulatorios y prudenciales preestablecidos. En estos tres ejemplos sencillos, que se pueden extrapolar a todo tipo de transacciones financieras, es la confianza en la solidez del sistema financiero, originada a su vez en la confianza en la calidad, seriedad y operatividad de la regulación estatal sobre ella, la que permite que las personas acepten operar a través del sistema y realizar transacciones con él.

La actividad financiera, bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico; constituye principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Esa confianza ha de ser permanente, continua, y totalmente extendida para que el sistema funcione. La historia económica global reciente demuestra que este no es un planteamiento meramente teórico: en el momento en que se rompe la confianza, el sistema financiero se paraliza, y con él la economía que de él depende. Las personas empiezan a desconfiar del sistema, y de su capacidad de cumplir la promesa contenida en cada una de las millones de transacciones diarias que dentro de él se realizan. El mantenimiento de esa confianza pública es el objetivo principal de la intervención del estado en este tipo de actividades. En eso, principalmente, consiste el carácter de "interés público" que la Constitución le imprime a este tipo de actividades, y de ahí el particular diseño institucional con el cual el constituyente dotó al Estado para permitirle la intervención en este tipo de actividades económicas⁵. (Negrilla fuera de texto).

Como vemos, no fue un capricho del legislador enmarcar la actividad financiera como de interés público, pues en su ejercicio se canalizan los recursos de la sociedad, por ello se requiere que únicamente sea ejercida por profesionales autorizados previo el cumplimiento de unos requisitos de carácter, idoneidad, responsabilidad, solvencia patrimonial⁶.

Por ello, cuando la actividad financiera es desarrollada por personas no autorizadas captando recursos de la ciudadanía mediante diversas operaciones exclusivas de las entidades vigiladas, se hace necesaria la actuación inmediata de las Autoridades con el fin de prevenir y controlar tal actividad ilegal a efectos de preservar el interés público propio de la captación de recursos en los términos del artículo 335 constitucional anteriormente citado.

Tal responsabilidad que tiene a cargo la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto de las cooperativas que vigila, busca además lograr restituir los

⁵ Corte Constitucional, sentencia C – 640 de 2010.

⁶ Artículo 53 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

dineros al público, finalidad que se soporta en la medida cautelar de suspensión de actividades y devolución expedita de los recursos captados ilegalmente.

Luego, la actividad de captación o recaudo de dineros del público, así como el manejo, administración e inversión de los mismos, en la medida en que tiene una connotación social y económica de impacto en la comunidad, sólo pueden ser desarrolladas por las instituciones autorizadas expresamente por las autoridades competentes, para constituirse y para funcionar, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la ley; esto, debido a que el bien jurídico que se persigue tutelar con dicho ordenamiento es el interés público económico y la confianza en el sector financiero colombiano, presupuestos que obviamente prevalecen siempre sobre los intereses particulares.

Por lo anterior, uno de los objetivos de esta Superintendencia consagrado en el artículo 325, numeral 1, literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), consiste en "Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas." es decir, personas diferentes a las instituciones que sí son vigiladas, condición que no ostenta su representada.

Así, antes de la expedición del Decreto 4334 de 2008, atendiendo las facultades otorgadas en el marco constitucional del artículo 335 transcrito, y en los artículos 325, numeral 1, literal d), 326, numeral 5, literal b) y 108 del EOSF, esta Superintendencia cuenta con la competencia para intervenir y controlar a las personas naturales y jurídicas de derecho privado que, sin contar con autorización previa, desarrollan actividades de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.

Debe anotarse que en el artículo 2.18.2.1., del Decreto 1068 de 2015, se establecen los supuestos que deben concurrir para que se predique que una persona natural o jurídica está captando, sin autorización, dineros del público de forma masiva. De conformidad con tal norma, se entiende que una persona natural o jurídica capta masivamente fondos del público, en cualquiera de los siguientes casos:

"Artículo 2.18.2.1. Definición. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.

Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

2. Cuando, conjunta o separadamente haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.

Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta.

Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones:

a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona o;

b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

Parágrafo 2. No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un periodo de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital.

Tampoco se computarán las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982."

Adicionalmente, debe resaltarse que en desarrollo de la declaratoria de emergencia social efectuada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, por las razones en él contempladas y, en particular, la proliferación en el país de captadores o recaudadores de dinero del público mediante operaciones no autorizadas, se hizo necesario adoptar un procedimiento ágil de intervención para detener dicha actividad no autorizada, actuación que se concretó a través del Decreto 4334 de la misma fecha, el cual deben aplicar tanto esta Superintendencia como la Superintendencia de Sociedades dentro del ámbito de competencia establecido a cada una de ellas.

Por tal razón, en el artículo 6º del Decreto mencionado se contemplan, a manera de ejemplo, más eventos que de presentarse también configuran la captación ilegal de dineros del público, en particular se consagraron los hechos objetivos o notorios como medio de prueba expedito y ágil para determinar la existencia de la misma, ya sea que se ejecute directamente o a través de intermediarios y mediante modalidades tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. Veamos:

"ARTÍCULO 6º. SUPUESTOS. La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable."

A partir de la expedición del Decreto 4334 de 2008, se tiene que la intervención procede cuando existen hechos objetivos o notorios que demuestren que una persona natural o jurídica, ya sea de manera directa o por intermediarios, adelantan la actividad de intermediación financiera no autorizada. Estos hechos objetivos o notorios son el medio de prueba expedito a partir del cual se ordena la indicada intervención. No se trata de una sanción sino de una medida cautelar, de aplicación inmediata, cuyo recurso no suspende su ejecución⁷. Una vez expedida la medida administrativa, será la Superintendencia de Sociedades la encargada de adelantar el proceso de intervención de que trata el citado Decreto 4334, y se deberá dar aviso de esta medida a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si la conducta desarrollada constituye delito, a la luz del artículo 316 del Código Penal, así como a las autoridades administrativas de carácter territorial (alcaldías, gobernaciones) con el fin de que estas últimas adelanten las actuaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y en aplicación del principio de coordinación entre autoridades administrativas⁸.

Estas dos normas interpretadas de manera armónica y sistemática conceden unas facultades que conserva esta autoridad administrativa y se ampliaron con la expedición de la normatividad especial posterior, dando paso a un procedimiento especial que permitiera actuar de manera inmediata contra quienes lleven a cabo esta actividad ilegal.

⁷ Literal a) artículo 13, Decreto 4334 de 2008.

⁸ Ley 489 de 1998, artículo 6.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

Así, para cumplir el objetivo señalado en el artículo 325 del EOSF anteriormente reseñado, esta entidad cuenta con facultades especiales consagradas en el literal a) numeral 4° del artículo 326 del EOSF para "Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio irregular de la actividad financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operan personas naturales o jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar su situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para preservar la confianza del público en general"⁹, y en el literal b) numeral 5 artículo 326 EOSF para "Imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 108, núm. 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a las personas naturales y jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización."¹⁰, en concordancia con los supuestos de captación ilegal previstos en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y los hechos objetivos o notorios de la misma actividad consagrados en el Decreto 4334 de 2008. (Negrita fuera de texto).

En caso de establecerse por este órgano de control, como en el caso que nos ocupa, que se está en presencia de una captación de recursos en forma irregular, procede adopción de las medidas cautelares previstas en el numeral 1° del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar que impone la Justicia Ordinaria.

En efecto, en el numeral 1 del artículo 108 del mencionado Estatuto se dispone lo siguiente:

"1. Medidas cautelares. Corresponde a la Superintendencia Bancaria imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización:

"a) La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos (\$1'000.000) cada una;

"b) La disolución de la persona jurídica, y

"c) La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente, para lo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos administrativos que señala el presente Estatuto para los casos de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras.

"Parágrafo 1°. - La Superintendencia Bancaria entablará, en estos casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público".

"Parágrafo 2°. - La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 a cualquier persona que obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como a aquellas personas que le suministren información falsa o inexacta"

En resumen, si en desarrollo de la actuación administrativa adelantada por esta autoridad y en ejercicio de sus funciones de prevención y control, encuentra evidencia que respecto de determinada actividad están configurados los hechos objetivos o notorios o los supuestos de captación no autorizada de dineros del público, consagrados, en su orden, en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008 y en el artículo 2.18.2.1 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, esta Superintendencia debe imponer alguna de las medidas administrativas establecidas en el numeral 1 del artículo 108 del EOSF, ya mencionadas, además de remitir el expediente, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades, para que conforme a las facultades otorgadas en el Decreto 4334 de 2008, adelante el procedimiento de

⁹ Artículo 326, Núm. 4, literal a) del EOSF.

¹⁰ Artículo 326, Núm. 5, literal b) del EOSF.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

intervención administrativa, así como a la Fiscalía General de la Nación, con el fin que evalúe las posibles consecuencias penales, según lo establecido en el artículo 316 del Código Penal, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio de Transporte, entre otras autoridades con el fin de preservar los activos del captador y ponerlos a disposición de la Superintendencia de Sociedades.

Dentro de la medida adoptada por este organismo, se ordena la publicación de la parte resolutive de la misma en un diario de circulación nacional, indicando que se trata de una operación de captación o recaudo no autorizado de dinero del público en forma masiva, con la finalidad de informar al público en general sobre esta actuación, así mismo, se advierte sobre la posibilidad que tiene el sujeto de la medida de interponer recurso de reposición ante este Organismo contra el acto administrativo proferido en ejercicio de su derecho a la contradicción y de defensa.

Con la imposición de la medida administrativa finaliza la competencia de la Superintendencia Financiera en la materia y en adelante, sólo la Superintendencia de Sociedades, queda facultada para disponer de los bienes del captador en el ámbito del derecho administrativo. Así, tratándose de las medidas administrativas que impone la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto de los captadores ilegales, en particular, la orden que da a las entidades vigiladas para que congelen los correspondientes activos del captador, procede que se tenga presente que la misma queda supeditada a las decisiones que sobre tales activos y los demás que se identifiquen, expida la Superintendencia de Sociedades, de forma directa o por conducto del Agente Interventor o del Liquidador que designe con ocasión de la toma de posesión de los bienes y demás activos del captador.

Como vemos, no es una facultad discrecional de esta Autoridad la imposición de medidas cautelares, toda vez que es el ordenamiento positivo el que establece en materia de captación no autorizada de recursos del público que se imponga alguna de las medidas administrativas consagradas en el artículo 108 del EOSF y no sanciones, en lo que compete a esta Superintendencia y, en el Decreto 4334 de 2008 en lo que corresponde a la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, en consideración a los argumentos del abogado recurrente, debe afirmarse que, el procedimiento anteriormente reseñado aplicable respecto de personas que captan recursos sin contar con la autorización de ésta Superintendencia, es sustancialmente diferente del proceso administrativo sancionatorio regulado en los artículos 208, 209 y 211 del EOSF, el cual es aplicable respecto de las entidades vigiladas por esta Entidad o que cuentan con autorización para funcionar, que tiene como fin verificar si en las respectivas actividades autorizadas las vigiladas dan cumplimiento a las normas que regulan su operación y funcionamiento.

No puede perderse de vista que en materia de captación o recaudo masivo de recursos del público el procedimiento aplicable corresponde a un "procedimiento cautelar y especial", por el ejercicio no autorizado de una actividad propia de nuestras vigiladas, para lo cual aplica lo establecido en el artículo 108, el literal d) numeral 1 del artículo 325, el literal a) del numeral 4 y el literal b) numeral 5 del artículo 326 del EOSF. Las medidas de este procedimiento especial son de aplicación inmediata, de manera que seguir procedimientos previos haría nugatoria la ejecución de la medida y, en consecuencia, no resultaría posible reprimir con éxito el ejercicio ilegal de actividades del resorte exclusivo de las entidades vigiladas por esta Superintendencia.

En este sentido, no es procedente aplicar en el procedimiento cautelar y especial que se adelanta para establecer la existencia de una captación ilegal, el procedimiento establecido en el artículo 208 del EOSF, como tampoco el

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

procedimiento administrativo general, común y principal contenido en el Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACA, y específicamente, el artículo 47 citado por el recurrente, procedimientos de naturaleza sancionatorio que no se compadecen con el procedimiento ágil y expedito que debe aplicar esta Autoridad para detener la actividad de captación masiva no autorizada de recursos del público. Si de esta forma se hiciera, se desconocería la naturaleza cautelar de la medida administrativa impuesta al captador de recursos del público, aunado que se desconocería que la actuación de esta Superintendencia debe realizarse en términos inmediatos, puesto que, como se ha dicho, dicha actividad no autorizada atenta contra el interés público económico y contra la confianza del público en el sistema financiero colombiano, por lo cual de aplicarse dicho procedimiento general, la actuación se opondría a su esencia cautelar y especial, y desconocería la inmediatez que exige el actuar de esta Autoridad para proteger el ahorro de los colombianos y preservar la confianza del público.

Procede traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-135 del 25 de febrero de 2009 al hacer el análisis de exequibilidad del Decreto 4333 de 2008, cuando afirmó que "(...) En el marco de la declaratoria de emergencia el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4334 de 2008, en virtud del cual se estableció un procedimiento de intervención con el fin de contar con mecanismos ágiles y efectivos para reprimir desde lo administrativo la conducta de captación no autorizada de dineros, con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado y crear de instrumentos para la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de esas actividades (...)"

Lo anterior, ha sido confirmado por el Consejo de Estado¹¹, Corporación que ha expuesto en relación a la índole de las medidas administrativas del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como fue la aplicable en el caso de la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, dentro de una actuación administrativa, relativa al ejercicio ilegal de la actividad aseguradora "(...) Por lo que se desprende del artículo 108 del EOSF y como bien lo sostienen él a quo y la parte demandada, las medidas de que trata dicha norma son de carácter precautelativo, esto es, que por definición no pueden prevenir ni admitir el surtimiento de procedimiento previo frente al ejercicio ilegal de la actividad de que se trate, en el caso, la actividad aseguradora (...)" (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Así las cosas, atendiendo precisamente los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la naturaleza cautelar y especial del procedimiento administrativo que se adelanta para verificar si se configura o no la actividad de captación ilegal de recursos, cualquiera que sea el nombre que reciba, el contrato que medie o el activo al que se pretenda referir, no resulta procedente agotar etapas de notificación de apertura de visita, citación a terceros interesados, formulación de cargos y traslado de pruebas, propias del procedimiento administrativo general, común y principal, consagrado en el Título III del CPACA. Por el contrario, se reitera que, en materia del ejercicio no autorizado de la actividad financiera, se aplica un procedimiento especial y cautelar que pese a no estar reglado constituye un mecanismo abreviado del procedimiento general, que permite intervenir de manera inmediata las conductas, operaciones y el patrimonio de las personas involucradas en esta actividad ilegal y de quienes amenazan con desarrollarlas en adelante.

Tal situación fue abordada por la Corte Constitucional en la sentencia C - 145 de 2009 del 12 de marzo de 2009, mediante la cual se llevó a cabo la revisión constitucional del Decreto 4334 de 2008, en el siguiente sentido:

"De esa manera, la norma bajo análisis delimita el ámbito de aplicación del régimen de intervención regulado en el Decreto 4334 de 2008, dotando al mencionado organismo de las más extensas atribuciones, lo cual se justifica constitucionalmente si se tiene presente que lo que busca el Gobierno es encarar una situación excepcional originada por la captación masiva y habitual de dineros del público,

¹¹ Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Magistrado Ponente: doctor Daniel Manrique Guzmán. Sentencia del 7 de octubre de 1999. Expediente No. 9529.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PÁLACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

sin la debida autorización legal, como garantía de que esos acontecimientos no se repetirán y de ahí que sea indispensable que tales facultades no sean ejercidas arbitrariamente para fines distintos a los mencionados en dicha preceptiva.

Esa medida tiene además relación con las causas que generaron la declaratoria de emergencia social mediante el Decreto 4333 de 2008 y con el propósito fundamental del Decreto 4334 del mismo año en revisión de adoptar urgentes medidas con fuerza de ley para intervenir de manera inmediata las conductas, operaciones y el patrimonio de las personas involucradas en la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización estatal y las de quienes amenazan con desarrollarlas en adelante.

Para esta Corte tal determinación no es una decisión inapropiada o carente de sustento jurídico, pues a través de las superintendencias el Gobierno desarrolla la función constitucional de ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control, para el caso sobre las personas que realicen las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, al igual que sobre cooperativas y sociedades mercantiles (art. 189-24 Const).

Así mismo, es imperativo constitucional que se realice intervención sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley (arts. 150-19-d, 189-24 y 335 Const.); al respecto conviene acotar que, ni en la Constitución ni en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, se prohíbe ni limita la intervención del Estado en las mencionadas actividades. En relación con el significado de tal intervención, la jurisprudencia ha señalado:

"... el artículo 334 de la Constitución confía al Estado la dirección general de la economía y le ordena intervenir, por mandato de la ley -que no solamente puede serlo la expedida por el Congreso sino también la contenida en decretos legislativos expedidos por causa de grave emergencia-, para racionalizar aquélla, con el fin de conseguir, entre varios objetivos más, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, así como para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.

En igual sentido, el artículo 335 constitucional hace explícito el interés público de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y de cualquiera otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos de captación y del ahorro privado, y en consecuencia estatuye que se ejercerán previa autorización del Estado y conforme a la ley, 'la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito'."

2. Cobran así sentido los mandatos de los artículos 2° y 7° del Decreto 4334 de 2008, que establecen que la intervención sobre quienes participan en la actividad financiera sin la debida autorización del Estado, es un conjunto de medidas administrativas, que apuntan a los objetivos fundamentales de suspender inmediatamente las operaciones o negocios de quienes ejercen dicha actividad y organizar un procedimiento cautelar orientado a lograr la pronta devolución de los dineros, medida que, por la razones antes indicadas no es desproporcionada ni irrazonable, ya que, se repite, es trasunto del deber de intervención estatal previsto en los artículos 333, 334 y 335 superiores; tampoco se observa que afecte garantías fundamentales, ya que, por el contrario, la determinación de esos objetivos busca proteger los derechos de los depositantes y el interés público ínsito en el manejo de los recursos de captación.

Asiste razón a la Superintendencia Financiera en la intervención efectuada a su nombre, en que con la asignación hecha a la Superintendencia de Sociedades aumentan las posibilidades de intervención estatal, en lo que al ejercicio de la función de policía administrativa concierne, ya que la legislación ordinaria no ofrece herramientas aptas para enfrentar las nuevas modalidades de captación y recaudo no autorizadas de dinero del público; así mismo, se amplía el espectro para supervisar también sociedades comerciales en todo el país, que al amparo de esa condición, irregularmente se dedican a dichas actividades, lo cual redunda a favor de los fines perseguidos con la declaratoria del Estado de Emergencia Social y con el Decreto Legislativo que se revisa...."

Es importante señalar que el procedimiento administrativo expedito y concreto aplicable en materia de captación no autorizada de recursos del público, no permite que se caiga en el yerro de asumir que el mismo es carente de garantías de los derechos constitucionales, toda vez que dicho procedimiento se desarrolla de conformidad con el principio

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de participantes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

superior de legalidad de la función pública¹², en virtud del cual la gestión de la administración debe someterse a normas previamente establecidas y cumplir los objetivos propuestos en ellas, atendiendo el debido proceso del cual se deriva el reconocimiento de los derechos de los administrados a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y controvertir pruebas, a ejercer el derecho de defensa e impugnar los actos administrativos, garantías que se preservan en la actuación administrativa que culminó con la expedición de la Resolución 1112 de 2019. En este sentido, se resalta que esta Autoridad ha sido respetuosa del cabal cumplimiento del debido proceso, del derecho a la defensa y del acceso a la justicia, entre otros.

Como vemos, frente al ejercicio de la actividad financiera no autorizada, esta Entidad no aplica la facultad del *ius puniendi* del Estado Colombiano, pues la mismo es sujeto de un procedimiento cautelar y especial y de medidas administrativas expeditas e inmediatas para conjurar la actividad no autorizada y evitar los perjuicios de su desarrollo, mediante la orden de suspensión inmediata de actividades y de devolución de los recursos captados.

Según se observa en la Resolución objeto de reproche, no se ha sancionado a la recurrente, sino que se le ha impuesto una medida cautelar ordenando que suspenda el desarrollo de una actividad de captación masiva de recursos para la cual no está autorizada, a su vez que se le impone la obligación de devolver los recursos obtenidos en desarrollo de sus actividades piramidales, y se ordena también la congelación de los recursos de la captadora para que los mismos sean puestos a disposición de la Superintendencia de Sociedades en el proceso de intervención de que trata el Decreto 4334 de 2008.

En este sentido, no es admisible el argumento esbozado en el recurso al señalar que la actuación administrativa adelantada corresponde a un proceso administrativo sancionatorio, pues tal como ha sido debidamente sustentado, en materia de captación no autorizada de recursos del público se está frente a un procedimiento administrativo de carácter especial, disposiciones legales que desconoció el apoderado y no frente a un procedimiento de carácter sancionatorio de los recursos captados del público.

5.1.1.2. Del debido proceso.

El apoderado recurrente señala que el principio del debido proceso indica que las ordenes de la administración deben corresponder a una rigurosa investigación y análisis, más no de "*pronunciamientos abiertos, impersonales, imprecisos como es que mi cliente recibió de 8 personas y que tiene que devolver cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.000.000.00) sin determinarse a quien, ni en qué tiempo, ni dónde, ni en qué circunstancias se debe hacer esa devolución (...)*".

Como vemos, en lo que corresponde a la argumentación planteada por el apoderado de la recurrente sobre lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política en relación con el principio del debido proceso, procede recordar que la norma citada establece: "*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...)*"

Así, tenemos que el debido proceso es el conjunto de normas y reglas procesales predeterminadas en la Constitución y la Ley, que obligatoriamente debe acatar toda autoridad administrativa, con el fin de salvaguardar los derechos de

¹² Sentencia C – 115 de 2005.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

los asociados. Del citado derecho se desprende que deben respetarse todas las garantías para el investigado e igualmente es necesario que se cumplan las formalidades propias del proceso.

Lo anterior, tiene sustento vía jurisprudencia, una de las cuales se encuentra contenida en la emitida por la Corte Constitucional Sentencia T – 965 del 8 de octubre de 2004 con ponencia del HM Humberto Sierra Porto, oportunidad en la que se expuso:

"(...) El derecho al debido proceso administrativo es definido, entonces, como (i) el complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí y (iii) cuyo fin esta previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones, y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica de los administrados (...)"

Al respecto, es preciso advertir que esta Superintendencia en cumplimiento del procedimiento especial anteriormente citado, desarrolla su actuación administrativa frente a personas naturales o jurídicas no sometidas a su vigilancia, de quienes tenga evidencia atendible que permita inferir la ejecución de actividades de recaudo o captación masiva de dineros del público sin autorización previa del Estado, esto es, ilegalmente, con base en lo establecido en el literal a) numeral 4 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio irregular de la actividad financiera, dirigidas a establecimientos, oficinas o lugares donde operan personas naturales o jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, visitas en las cuales está facultada para examinar sus archivos y determinar su situación económica.

Tal actuación administrativa, se inicia con la expedición de una comunicación dirigida a la persona objeto de investigación, en la cual se informa la práctica de la visita, en las instalaciones del domicilio correspondiente, el carácter especial de la actuación, se ponen de presente las facultades con las que cuenta este Organismo para tal fin¹³, así como las funciones correspondientes previstas en los numerales 8, 9, 10 y 16 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010¹⁴, el número de funcionarios de este Organismo designados para realizar la visita de inspección, los documentos que deben aportarse, con la precisión acerca del derecho que le asiste a la persona investigada de suministrar todo aquello que considere pertinente para demostrar que su actividad no se enmarca dentro de los presupuestos de una captación no autorizada de recursos del público y ejercer su derecho defensa.

Todo lo anterior, se cumplió a cabalidad mediante el oficio número 2019103103-010 dirigido a la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, escrito en el que se le informó sobre la visita de inspección a realizar cuya finalidad estaba determinada a establecer si existía un recaudo no autorizado de recursos del público en las actividades desarrolladas por la pirámide denominada "TELAR DE LOS SUEÑOS", en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 y el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 ya citados en extenso, ello con la finalidad de obtener su declaración sobre los hechos objeto de investigación.

¹³ Estatuto Orgánico del Sistema Financiero literal a) del numeral 4º del artículo 326.

¹⁴ "Artículo 11.2.1.4.10. Despacho del Superintendente Delegado para Protección al Consumidor Financiero y Transparencia. (...) 8. Desplegar las medidas a su alcance para prevenir el ejercicio ilegal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores. 9. Adoptar las medidas cautelares y ejecutar las medidas de intervención administrativa previstas por las normas vigentes, para los casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las entidades supervisadas. 10. Coordinar las medidas de intervención administrativa y las medidas cautelares que se profieran en las investigaciones relacionadas con el desarrollo de actividades, negocios y operaciones propias de las entidades supervisadas, sin la debida autorización estatal. 16. Ordenar y dirigir la práctica de visitas con el fin de obtener conocimiento sobre los asuntos de su competencia.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

Así, al momento de escucharla en diligencia de declaración de parte¹⁵, se le informó a su representada sobre las garantías constitucionales previstas en el artículo 33 de la Constitución Política, en lo relativo al relato de eventos que pudieran comprometer su propia responsabilidad y se le señaló que podía estar acompañada de un profesional del derecho, para lo cual compareció con su apoderado, preservando y amparando así sus derechos constitucionales.

Una vez conformado y analizado el recaudo probatorio con total acatamiento a los principios de necesidad, contradicción y legalidad de la prueba, debido proceso, publicidad, presunción de inocencia, defensa y contradicción, y en cumplimiento de las formalidades procesales, el mismo fue plasmado en el acto administrativo recurrido, el cual fue debidamente motivado al relacionar cada hecho con su respectivo elemento probatorio que demuestra el incumplimiento por parte de su representada de los presupuestos normativos establecidos ya citados, así las cosas, quedó establecido que el "TELAR DE LOS SUEÑOS" y las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ y otros en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dinero de este esquema, constituyen operaciones de captación masiva no autorizada de recursos del público, que en virtud de lo establecido en el artículo 335 Constitucional requieren autorización previa del Estado, así mismo quedó establecido que ni el "TELAR DE LOS SUEÑOS" ni la señora POLANCO RODRIGUEZ cuentan con la autorización de esta Superintendencia para llevar a cabo actividades de captación de recursos del público.

Precisamente en aplicación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional, que implica que toda investigación debe surtir *"con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"*, y contrario a lo manifestado por el apoderado recurrente, no es posible para esta Superintendencia, aplicarles al "TELAR DE LOS SUEÑOS" y a su representada el procedimiento administrativo sancionatorio, por cuanto la investigación no tiene esa naturaleza que pretende endilgar el apoderado, sino que se trata de un procedimiento de naturaleza ágil y especial, lo que obliga a esta Superintendencia, en los términos del artículo 335 Constitucional, a aplicar el procedimiento administrativo especial que conlleva la adopción de una medida administrativa cautelar para detener estas actividades al margen de la ley, y a su vez devolver la totalidad de los dineros captados del público bajo las actividades no autorizadas.

Como quedó explicado en extenso en la Resolución 1112 de 2019, esta Superintendencia adelantó una investigación rigurosa y pormenorizada de las actividades del TELAR DE LOS SUEÑOS, investigación cuyo análisis permitió demostrar la responsabilidad de la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, a partir de la verificación de los hechos y de las pruebas que obran en la actuación, las cuales, se insiste, se recabaron con apego al derecho de defensa y debido proceso que rigen este tipo de actuaciones. Dicho acto administrativo le fue notificado personalmente el día 26 de agosto de 2019, en donde se precisó el derecho que le asistía a interponer el respectivo recurso de reposición durante los siguientes diez (10) días hábiles, recurso que como lo conoce el apoderado recurrente, conlleva la oportunidad de allegar y solicitar pruebas, a controvertir todas y cada una de las pruebas utilizadas en el acto administrativo, así como el acceso al expediente de la actuación el cual se compone de los documentos y hallazgos

¹⁵ Esta Superintendencia, con base en lo establecido en el literal e) numeral 4 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, está facultada para interrogar con la observancia de las formalidades previstas para las investigaciones judiciales, referidas a la práctica de pruebas establecidas en el Código General del Proceso, a cualquier persona cuyo testimonio pueda ser útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones de inspección e investigación. Así mismo, los funcionarios de esta Superintendencia comisionados para practicar las diligencias de inspección, se encuentran autorizados para examinar archivos, registros documentales o electrónicos, correspondencia y demás información que se requiera para el cumplimiento de la labor encomendada.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

de los inspectores recabados dentro de la actuación administrativa e incorporados bajo el radicado número 2019103103.

Conviene recordar igualmente que, el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas opera en tres estadios, a saber: en la formación de la decisión o sea en todo el trámite que se surta, desde su iniciación, en la impugnación de la determinación, mediante el ejercicio de los recursos en la vía gubernativa y, en la notificación o publicación de esta decisión, observando en todas esas etapas la plenitud de las formas propias de la respectiva actuación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en el presente caso se atendieron las reglas relativas en cuanto a la competencia del funcionario que adoptó la decisión; al procedimiento aplicable para el efecto, es decir, la realización de una visita de inspección por parte de esta Superintendencia en la cual se le informó expresamente a su representada el derecho que le asistía de suministrar toda la información y explicación que considerara necesaria respecto de la pirámide denominada "TELAR DE LOS SUEÑOS" para evaluar la configuración de los hechos objetivos o notorios a los que alude el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con los supuestos para predicar una captación o recaudo no autorizados de recursos del público señalados en el artículo 2.18.2.1. del Decreto 1068 de 2015, acervo probatorio recabado con el pleno cumplimiento de todas las formalidades procesales y que sustenta la medida administrativa impuesta por esta Autoridad según consta en la Resolución 1112 de 2019.

Ahora bien, respecto del argumento del abogado recurrente según el cual considera que el acto administrativo objeto de debate "carece de la claridad y la precisión que obliga el artículo 47 del CPACA", debido a que, en su criterio, no se estableció a quien le recibió dinero su poderdante, es preciso reiterar que el artículo 47 del CPACA no es aplicable a esta actuación administrativa, por las razones ya anotadas en extenso. Por otro lado es necesario señalar que parte el apoderado de la recurrente de consideraciones erróneas, y desconoce las afirmaciones que de manera libre manifestó su poderdante en la declaración de parte rendida, diligencia en la que aceptó ser parte de los "TELARES", haber recibido treinta y seis millones (\$36.000.000) al vincular inicialmente a dos personas más que entregan la misma cantidad de dinero, y estas a su vez integran a dos (2) personas más que igualmente entreguen su regalo y así sucesivamente hasta conformar una estructura de quince (15) personas divididas en cuatro niveles, siendo el nivel cuarto (4) la base y el nivel uno (1) la escala final que otorga la calidad de "mujer agua", ciclo que obligatoriamente se cumplió pues de otra manera no hubiese recibido el monto indicado y el cual le permitió a su vez recibir el proceso de "reciclaje" mediante el que recibió la suma adicional de seis millones setecientos mil pesos (\$6.700.000).

En este sentido, es procedente poner de presente ante la recurrente y a su apoderado el aporte probatorio de la declaración de parte por ella rendida¹⁶ en desarrollo de la presente actuación administrativa, que difiere por completo de las argumentaciones hechas por el abogado en el recurso que se analiza. Veamos:

"(...)PREGUNTADO: Sírvase informar a este Despacho si tiene conocimiento sobre el grupo denominado TELARES que vínculo o relación tiene usted con las actividades que se desarrollan en relación con el denominado grupo CONTESTO: Si tengo conocimiento, todo comenzó por una amiga xxx que me invitó a una reunión en un salón comunal 154 cerca a la 9 en Bogotá, fui a esa reunión nos explicaron un modelo de inversión donde decían que dábamos 4.500.000 y al cabo de un tiempo de un mes esperábamos nuestro turno que funcionaba como las cadenas, yo daba mi cuota y esperaba mi turno para recibir el dinero que 30 0 31 millones, yo lo entendí de esta manera, así me lo plasmaron, yo fui como invitada de ella y con la hermana de ella, en esa reunión nos mostraron un video, una

¹⁶ Radicado 2019103103-0050-002.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1579

DE

Hoja No. 17

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

presentación y nos explican el funcionamiento como una cadena tu das un dinero una vez se complete el grupo esperas tu turno, hay dos requisitos invitar a dos personas más a que hagan parte del movimiento y colaborar para que entre todas puedan participar no pueden ingresar hombres, te involucran la historia sentimental de los sueños y los objetivos que uno se cree el cuento, hay testimonios de mujeres que dicen que ya está ingresando nuevamente, te dicen que no es una pirámide porque no hay una cabeza, porque uno sale, no es eterno, hay asesoría de abogados, muestran videos de gente reconocida políticos, presentadoras, al ver eso uno se cree el cuento y lo ve confiable, después de esa reunión tomo la decisión y yo le comente a mi esposo quién no estuvo de acuerdo, pero yo desafortunadamente no le hice caso y de mi sueldo me metí sin que él supiera(...)"

"PREGUNTADO: De acuerdo con lo manifestado por usted, sírvase indicar de cuantas personas recibió recursos provenientes del TELAR. CONTESTO: yo recibí de Marta Díaz, Patricia Sánchez, Estella, Carolina Baron, Nelsy, Catalina, Marcela y Laura, de ellas desconozco el apellido, el día de la consagración me entregaron el dinero todas en efectivo, sin embargo previo a esta reunión Marta, Patricia y Estella consignaron a la cuenta de Bancolombia cuyo titular es mi esposo, yo retire este dinero y lo lleve en efectivo para la consagración para hacer el ritual, es de aclarar que esta cuenta corresponde a un fondo común, era la única cuenta que manejábamos como esposos, por esta razón se consignó el dinero allí. PREGUNTADO: De acuerdo con lo anteriormente expuesto, sírvase precisar a este despacho en que consiste el proceso de reciclaje del TELAR y si usted participó en él. CONTESTO: El reciclaje es cuando tú eres AGUA y te consagras le das uno de tus regalos a quién tú le diste el regalo inicial, en mi caso yo le di uno de mis regalos a una señora de nombre DIANA, lo deje en la portería de mi edificio y no se nada más de ella, ella fue a varias reuniones, y yo recibí reciclaje de Marta la suma de 4.500.000 y de Estella 2.200.000 aproximadamente porque ella no recibió todos los regalos, de las demás personas no tengo conocimiento si se consagraron o no, porque como va creciendo se pierde el control, el retejer es volver a ingresar y pasar por todos los elementos, ese proceso nunca lo hice(...)"

Es precisamente en esta diligencia en la que se indicó a quienes le recibió dinero su poderdante.

De la misma manera, obra en el expediente la prueba documental aportada por la señora JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO también sujeto de la medida administrativa impuesta bajo la Resolución 1112 de 2019, que corresponde a un comprobante de registro de operación, mediante el cual demuestra el depósito financiero efectuado por la suma de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) a una cuenta de ahorros cuyo titular es la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, medio de prueba descrito en el numeral 11.4.2. del acto administrativo que se recurre, sobre el cual el apoderado no presenta objeción alguna ni desconoce su contenido, el cual se cita nuevamente para ilustración del recurrente. Veamos:

(...)

"Imagen aportada por la señora JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO bajo el siguiente concepto: "“adjunto foto de mi teléfono celular donde me es indicado por lizeth Flores realizar la consignación a la señora Cindy polanco, esposa del gerente financiero (...) por la suma de \$2.500.00 los dos millones restantes se los entregue en efectivo a la señora Lizeth Florez"

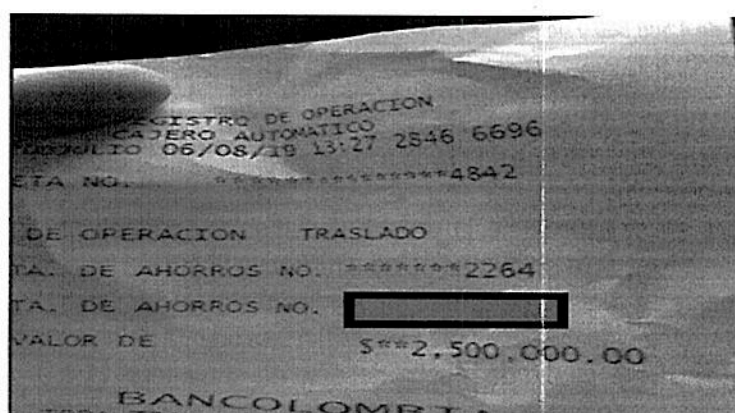
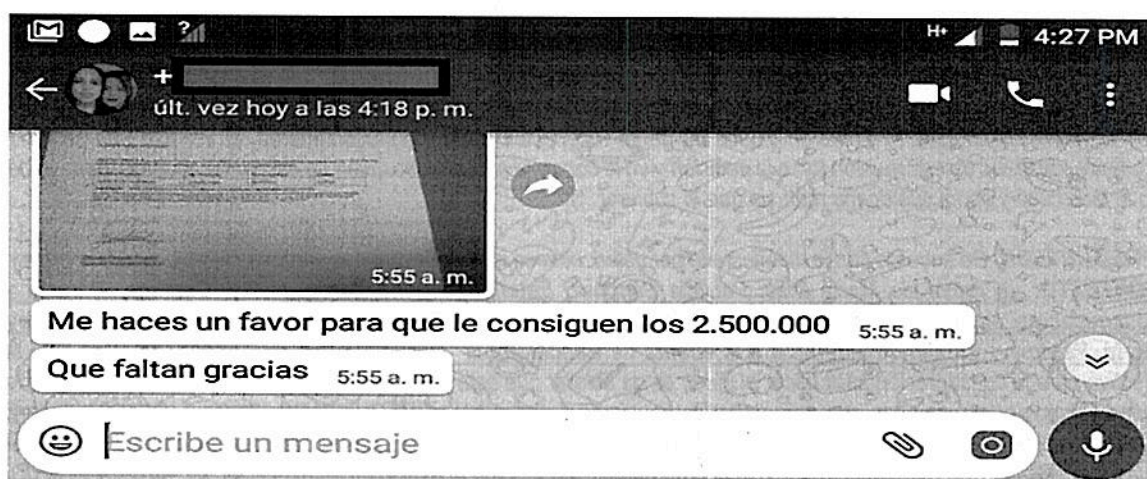
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1579

DE

Hoja No. 18

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.



Se verificó que el número de cuenta en la que se recibió el movimiento financiero objeto de la imagen previamente transcrita corresponde a un producto financiero cuyo titular es la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ".

Teniendo en consideración lo anterior, mediante la declaración de parte rendida por su representada en pleno uso de sus facultades legales y que fue citada en el numeral 11.1.1 de la Resolución 1112 de 2019, manifestó en primera medida como llegó al "TELAR" precisando que fue por invitación de una amiga suya lo que la llevó a asistir a una reunión en donde le pusieron en conocimiento todo el funcionamiento del esquema y sus requisitos de ingreso, así mismo afirmó haber participado y recibido dineros con ocasión de las actividades del "TELAR" por parte de "Marta Díaz, Patricia Sánchez, Estella, Carolina Barón, Nelsy, Catalina, Marcela y Laura" de quienes recibió el dinero en efectivo el día de la consagración, salvo "Marta, Patricia y Stella", quienes previo a dicha ceremonia le consignaron el valor en la cuenta de ahorros de su esposo, tal como lo afirma en su dicho; para un total de treinta y seis millones de pesos (\$36.000.000).

Sumado a lo anterior, y tal como quedó demostrado en la Resolución 1112 de 2019, la "mujer agua" que se retira convirtiéndose en "hermana guardiana" o "hermana mayor" continúa recibiendo un "regalo" o ganancia, en atención a que cada una de las "mujeres fuego" que conformaban la base de su telar, le entregan nuevamente cada una, la suma de cuatro millones quinientos mil pesos (\$4.500.000) una vez cada una de ellas se consagra en el nivel de "mujer agua", lo que se denominó al interior del esquema como el primer reciclaje, y que su representada en la misma declaración

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

reconoció haber recibido "reciclaje" de "Marta" por valor de cuatro millones quinientos mil pesos (\$4.500.000) y de "Estella" en un valor aproximado, según indica, de dos millones de pesos (\$2.200.000), para un total de seis millones setecientos mil pesos (\$6.700.000) por concepto de reciclaje.

Entonces, el valor descrito en el resumen presentado en el numeral 11.4.2. de la Resolución 1112 de 2019 en donde se señala que su representada recibió la suma de cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.200.000) corresponde a las sumas anteriormente citadas por concepto de haber ocupado el nivel de "mujer agua" más el valor recibido en el proceso de "reciclaje" cuyo soporte probatorio reposa en la declaración de parte rendida por su poderdante, más la suma de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) acreditada por la señora JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO mediante los soportes documentales correspondientes.

Como vemos, carece de todo fundamento y consideración razonable lo dicho por el abogado recurrente en el sentido de señalar que esta Autoridad mediante la Resolución 1112 de 2019 se limitó *"simplemente decir que mi cliente recibió cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.200.000.00) y que recibió de 8 personas, sin determinar realmente a quien le recibió, es un acto administrativo que carece de la claridad y la precisión que obliga el artículo 47 del CPACA, corriendo el riesgo de una nulidad futura"* pues tal como quedó plenamente demostrado, la responsabilidad de su representada fue determinada con base en los medios de prueba recabados que obran en el expediente de la actuación y debidamente señalados en el acto que se recurre, situación diferente es que el abogado desconozca el contenido de los mismos lo que no puede confundirse con una violación de las garantías constitucionales de parte de esta Autoridad a su representada y los demás sujetos de la medida.

5.2. De la solicitud del recurrente

El abogado recurrente concreta su solicitud en los siguientes cuatro puntos:

- "(...) PRIMERO Que aclare cómo debe mi cliente devolver los cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos (\$45.200.000) que según la Superfinanciera en el cuadro de la página 37 recibió mi cliente CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ.*
SEGUNDO Que se pronuncie la Superintendencia Financiera de Colombia, reponiendo la resolución 1112 de 2019, sobre quienes son las ocho (8) personas que dice la Superfinanciera dieron dineros a mi cliente CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ(SIC) y en qué circunstancias los recibió.
TERCERO Que tiempo tiene mi cliente para devolver esos dineros una vez verificado a quien y como los tiene que devolver.
CUARTO. Que se borre de la resolución 1112 de 2019 la mención que se hace en una prueba de la condición de mi cliente como esposa del Gerente Financiero y Administrativo de la empresa Idime".

5.2.1. Consideraciones de la Superintendencia Financiera

Frente a la solicitud del recurrente descrita en los numerales PRIMERO y TERCERO, sobre cómo hacer la devolución de los recursos captados y en qué tiempo hacerlo, debe insistirse en que los fines de la medida administrativa tomada mediante la resolución acusada atienden a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 108 del EOSF de acuerdo con lo señalado en el Decreto 4334 de 2008, esto es, suspender de manera inmediata las operaciones y negocios de captación o recaudo de dineros del público, realizados a través de personas naturales o jurídicas no autorizadas para el efecto, y como consecuencia, disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de los recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

Conforme a lo anterior, tratándose la Resolución objeto de reposición de una medida cautelar tal como fue ampliamente explicado, y no habiéndose demostrado de forma previa a la expedición del acto administrativo la efectiva devolución de los recursos, a pesar del dicho del abogado en su escrito sobre la intención de su poderdante en hacer entrega de éstos, se ordenó la devolución de los valores recibidos con ocasión de la participación de su representada en el esquema piramidal "TELAR DE LOS SUEÑOS", tal como quedó contenido en el numeral SEGUNDO de la parte resolutive de la Resolución 1112 de 2019 y conforme allí se lee, no se encuentra supeditada al cumplimiento de alguna condición o evento futuro para su ejecución, por el contrario se trata de un imperativo, cuyo alcance no es nada diferente a lo allí descrito, esto es la devolución de la totalidad de los dineros que se captaron sin autorización y que adicionalmente, impone en cabeza del administrado la carga de retornar las sumas recibidas con ocasión de su participación directa en los actos de captación, lo que supone que el destinatario de la medida administrativa conoce el alcance de sus actuaciones, situación que fue plenamente probada en el caso que nos ocupa, mediante la declaración de parte rendida por la señora POLANCO RODRIGUEZ quién en efecto precisó de que personas había recibido recursos, su cuantía y la forma en que le fueron entregados estos dineros, esto es, en efectivo o mediante depósito en producto financiero.

No obstante, es de advertirse que a partir de la expedición de la medida administrativa por esta Superintendencia Financiera ordenándole al captador ilegal la suspensión inmediata de las operaciones de recaudo no autorizado de recursos del público y congelado sus activos, entre otras acciones, la autoridad administrativa competente de manera privativa para adelantar el proceso de intervención administrativa de los activos del captador a efecto de procurar la devolución de los dineros captados ilegalmente a los reclamantes es la Superintendente de Sociedades en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008, por lo tanto será en este proceso y ante esa Autoridad en cabeza del agente interventor, en donde se dispondrá la oportunidad y la manera en que se llevará a cabo la devolución de los recursos captados.

Respecto de su petición descrita en el numeral SEGUNDO, la misma carece de fundamento pues la Resolución 1112 de 2018 dentro del acápite "Del acervo probatorio" señala los medios de prueba que sirvieron de fundamento para la adopción de la medida administrativa, en donde en el numeral 11.1.1. señala las declaraciones de parte recibidas respecto de las cuales se refiere un extracto de los aspectos más relevantes sin perjuicio de la mención que se hace al señalar que estos documentos obran dentro del expediente de la actuación administrativa adelantada identificado bajo el radicado 2019103103, en donde se encuentra la declaración de parte rendida por su representada en la que estuvo presente usted en su calidad de apoderado, mediante la cual expone las afirmaciones que pretende desconocer vía reposición, tal como fue precisado en el numeral 5.1.1.2. del presente acto administrativo.

Finalmente, en lo relativo a su solicitud enunciada en el numeral CUARTO, la misma tiene su sustento de manera enunciativa en el acápite "Hechos" del recurso, cuando señala: "NOVENO Según la Superintendencia en la página 53 de la resolución acá impugnada se respetó el derecho a la intimidad personal...y se cumplieron las garantías al debido proceso y al derecho a la defensa", lo que contraría la mención de la página 15 cuando se deja entrever la condición de CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ, como esposa del gerente financiero de Idime, mención que tiene que sea(sic) borrada de inmediato del acto administrativo de la referencia".

Para abordar este supuesto, es necesario traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional sobre el derecho a la intimidad, en donde se ha destacado su carácter transversal a los ámbitos de la vida humana, imponiendo respecto de los demás miembros de la sociedad, una obligación de abstenerse de realizar conductas que resulten en la

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

intromisión de las esferas reservadas que le corresponden a cada individuo, veamos a continuación algunos de los fallos de esta Corporación en este sentido:

"El derecho a la intimidad ha sido entendido como una esfera de protección del ámbito privado del individuo y de su familia, la cual se traduce en una abstención de conocimiento e injerencia en aquella órbita reservada que le corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros ni de intervención o análisis de grupos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones"¹⁷

"(...) el espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto. Es un derecho disponible que se manifiesta en diversos aspectos de la vida humana como en las relaciones familiares, las costumbres, la salud, el domicilio, las comunicaciones personales, los espacios para utilización de datos informáticos, las creencias religiosas, entre otros. La intimidad "implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas. Su ámbito "depende de los límites que se impongan a los demás, como exigencia básica de respeto y protección de la vida privada de una persona, que como lo ha resaltado la Corte, existen diversas formas en que puede ser vulnerado el derecho a la intimidad sea a través de la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado; la divulgación de los hechos privados; y finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales, aspectos estos dos últimos que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre"¹⁸.

A pesar de lo anterior, el derecho a la intimidad no es absoluto, en tanto ha señalado la Corte Constitucional existen razones de "interés general, legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente", y dichas limitaciones deben respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el contexto del sistema democrático"¹⁹.

Ahora bien, tratándose del derecho a la intimidad en relación con la circulación de información sobre una persona, es importante distinguir el tipo de información que se pretende divulgar a fin de diferenciar el grado de restricción sobre su circulación o exposición, esto es "determinar la intensidad con que dicha información se encuentra ligada la esfera íntima del individuo y a los casos en que la misma puede o debe ceder a favor del interés público"²⁰.

En ese sentido, la información esta categorizada en pública, semiprivada, privada y reservada, definida por el alto tribunal de la siguiente manera²¹:

"(...)La información pública, ha dicho este Tribunal, "en tanto no está relacionada con el ámbito de protección del derecho a la intimidad, recae dentro del ejercicio amplio del derecho a recibir información (Art. 20 C.P.)" y en consecuencia, es de libre acceso. Comprende la relativa a "los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas" así como a "los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia" y el dato sobre la pertenencia a un partido o movimiento político de quienes ejercen cargos de elección popular (integrantes). Ella "puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, privada o personal." Cuando se trata de esta información no se requiere la intervención de ninguna autoridad a efectos de autorizarla, ni se exige presentar una justificación particular para su conocimiento. En estos casos lo que ocurre, en realidad, es que el derecho a la intimidad se torna irrelevante.

(...)

¹⁷ Sentencia de Constitucionalidad C 872 de 30 de septiembre de 2003. Magistrado Ponente Dra Clara Inés Vargas Hernández

¹⁸ Sentencia de Constitucionalidad C 540 de 12 de julio de 2012. Magistrado Ponente Dr Jorge Iván Galindo

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Sentencia de Constitucionalidad C 692 de 12 de agosto de 2003. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

²¹ Sentencia de Constitucionalidad C 602 de 02 de noviembre de 2016. Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMÍREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

La información semi-privada corresponde a aquella información que no es pública, pero que se encuentra sometida a "algún grado de limitación para su acceso" de manera que "se trata de información que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales". En esa dirección esos datos son "aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general"

(...)

La información privada es aquella "que por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones". Comprende la relativa a "los libros de los comerciantes, (...) los documentos privados, (...) las historias clínicas o (...) la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva". Igualmente reviste la naturaleza de información privada la información genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares. En estos casos, el tipo de información revela dimensiones particularmente importantes de la vida personal, social y económica de las personas y que, debido a expresa disposición constitucional (arts. 15 y 250) o a su naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere o por la existencia de una decisión judicial. En estos casos, la justificación que explica la posibilidad de divulgar la información, en contra de la voluntad de la persona a la que se refiere, puede hallarse en finalidades especialmente importantes como ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un proceso penal.

(...)

Si se trata de información reservada, tal y como ocurre por ejemplo con la relativa a datos sensibles, a la inclinación sexual, a los hábitos personales o los datos relativos a la pertenencia a un partido o movimiento político de los ciudadanos votantes, ella "no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones". En este último caso, la relación entre el derecho a la información y la protección de la intimidad cambia de manera significativa. En efecto, el tipo de información de la que se trata hace que su conocimiento, en cuanto alude a datos de especial impacto, significado y trascendencia para las personas, se encuentra sometido a especiales cautelas, exigiendo la voluntad del sujeto concernido. En estos supuestos nadie puede pretender auscultarla". (Negrilla fuera del texto original)

Sobre la circulación o administración de información por parte de las autoridades judiciales o administrativas se ha indicado la pertinencia de clasificar la información que con ocasión de sus funciones pretende divulgar o guardar y la obligación que les asiste de atender en su función algunos principios que garantizan el derecho a la intimidad y habeas data²²:

"(...) cierta información que concierne al individuo puede ser divulgada sin el cumplimiento de requisitos especiales, al tiempo que otros datos, contentivos de información ligada a su ámbito personal, requieren autorización de autoridad competente o simplemente no pueden ser divulgados.

Así entonces, corresponde a las autoridades administrativas o judiciales determinar, en los casos concretos sometidos a su consideración, a qué tipo de información corresponden los datos por ellas solicitados o administrados, a fin de establecer si por solicitarlos o administrarlos se incurre en intromisión indebida en el ámbito íntimo del individuo.

Lo anterior debe entenderse acompasado por el cumplimiento de las normas que, sobre administración de datos personales, ha sistematizado la jurisprudencia constitucional. En este sentido, además de determinar el tipo de información que puede ser divulgada y el que no puede serlo, las autoridades administrativas y judiciales están en la obligación de guiarse por los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad del dato, con el fin de garantizar la protección, no sólo del derecho a la intimidad, sino también la del habeas data".

Ahora bien, revisados los apartados de la resolución en los que se hace referencia a la expresión que pone de presente la condición de la señora POLANCO RODRIGUEZ como "esposa del Gerente Financiero y Administrativo de la empresa Idime" y se refiere en el recurso viola el derecho a la intimidad, se observa que la misma está contenida en una imagen

²² Sentencia de Constitucionalidad C 692 de 12 de agosto de 2003. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

de una ventana de mensajería por medio de la cual se pone de presente una instrucción de consignación de dinero dada a la señora JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO por parte de LIZETH FLÓREZ destinatarias también de la medida adoptada bajo la Resolución 1112 de 2019, medios documentales que obran dentro del acervo probatorio del acto recurrido.

Sobre el particular, es importante destacar que la aseveración objeto de inconformidad tiene su origen en una prueba documental que provino de una de las declarantes como receptora o destinaria de dicha instrucción, y no de esta Superintendencia. Sumado a ello, es necesario aclarar que, la imagen, junto con los demás soportes que le acompañan en dicho acápite, tuvo como fin exponer en la resolución recurrida la manera en como operaba la solicitud de la suma e instrucción de entrega o consignación.

Adicionalmente, verificada por esta autoridad la expresión acusada en detalle, se determina que esta no corresponde a nada diferente a una indicación que en nada describe una situación íntima o reservada de la recurrente de cara a lo dispuesto en el ordenamiento positivo vigente sobre el particular, y que eventualmente, lo único que puede dejar ver es su estado civil o la existencia de una pareja como parte de su conformación familiar, siendo esta información de carácter pública como se indicó en párrafos previos.

Nótese además que, a lo largo de la resolución no se individualizó al esposo de la señora POLANCO RODRIGUEZ, esto es, no se suministró nombre, datos de identidad o de contacto que pudieran atentar contra su derecho a la intimidad, en este sentido no se presenta vulneración alguna por parte de esta Autoridad por lo que no resulta procedente retirar la mención realizada en este sentido, máxime cuando el abogado recurrente no presenta fundamentos de hecho o de derecho probatoriamente válidos que sustenten con expresión concreta los motivos de inconformidad frente a este supuesto, el cual solo se encuentra reseñado como un comentario subjetivo de su parte.

Con todo, este Despacho no acoge ninguno de los fundamentos invocados por el recurrente en el recurso interpuesto, por lo que no prosperan sus pretensiones.

SEXTO. Que las consideraciones expuestas en precedencia recogen las conclusiones y resultados del análisis que llevó a cabo esta Superintendencia frente a cada uno de los motivos de inconformidad planteados en el recurso que se analiza contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019, sin que se encuentren argumentos válidos y ciertos, ni elementos probatorios que desvirtúen las motivaciones que le sirvieron de fundamento para ordenar la medida de intervención señalada respecto de la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRIGUEZ y otros.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019, mediante la cual ésta Superintendencia impuso una medida administrativa por captación no autorizada de recursos del público respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242 y otros en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1579** DE

Hoja No. 24

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto de del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO identificada con cédula de ciudadanía número 52.728.210 LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.024.503.937, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.416.242, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 23.856.754, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.303.865, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.579.956, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.215.748, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.399.500, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.372.221 y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.924.811 en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema.

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente Resolución a la Superintendencia de Sociedades, para los fines propios de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. COMPULSAR copias de la presente Resolución a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes en las investigaciones de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR la publicación de la parte Resolutiva de este acto administrativo en un diario de circulación nacional, indicando que se trata de una operación de captación o recaudo no autorizado de dinero del público en forma masiva. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del numeral 1º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

ARTÍCULO. QUINTO. ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera y en la página Web de esta última Entidad.

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR PERSONALMENTE O SUBSIDIARIAMENTE POR AVISO según lo establecido en el numeral 4º del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable por remisión expresa del artículo 15 del Decreto 4334 de 2008, al abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ identificado con la C.C. 79.504.646 y tarjeta profesional número 84.275 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de apoderado judicial de la señora CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ o a ésta, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede ningún recurso, quedando agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los

25 NOV 2019

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y TRANSPARENCIA (E),

JOSE CAMILO TORRES DUQUE